

En nuestra sociedad, la educación que se brinda al pueblo se encuentra en disputa. La misma puede servir para la reproducción del sistema social imperante o para su transformación. Es por esto, que en el marco de la lucha de clases, no hay práctica educativa que sea neutral, que no sirva a los intereses de un sector social determinado, o que no legitime un consenso sobre determinada visión del mundo.

Quienes determinan qué y cómo se enseña tienen en sus manos un importante instrumento para determinar el modelo de país que quieren llevar adelante, su rumbo económico y su inserción internacional. Por este motivo a lo largo de la historia de nuestro país, las clases dominantes han impulsado reformas educativas tendientes a precarizar la formación de los estudiantes y a eliminar todo aspecto liberador, todo sentido crítico de la educación, sustituyéndolos por un papel funcional a los ideales del neoliberalismo. Sin embargo, en momentos concretos de nuestra historia, gracias a la lucha de trabajadores y estudiantes, se han arrancado conquistas como la autonomía y el cogobierno de la Universidad de la República, consagrados en la ley orgánica de 1958 y que luego fueron blanco de ataque del gobierno militar, evidenciando de esta manera la disputa que se da entorno a la educación.

En los últimos años en el Uruguay hemos vivido un ataque constante a la educación pública por el sistema político y en particular una estigmatización creciente hacia los gremios de la educación por parte del gobierno, que no ha dudado en apoyarse en los medios de



Inauguración del Instituto Tecnológico Regional de UTEC en Fray Bentos para cuya creación UPM (origen en Finlandia) invirtió 4 millones de USD.

comunicación, mostrando a la educación pública como atrasada e ineficiente. Se insiste en una supuesta caducidad del modelo educativo actual, reclamando que se incluyan formas de financiamiento estatal a la educación privada y se adopten formas de gestión empresarial en la educación pública.

Esto se debe a que el nivel educativo que un gobierno quiere para sus ciudadanos está asociado al modelo de país que ese gobierno tiene como objetivo, lo que en el caso del progresismo uruguayo ha significado un claro rol en el mercado mundial como exportador de materias primas, permitiendo a su vez el control del aparato productivo por parte de los grandes capitales internacionales que desembarcaron mediante la promoción de la inversión extranjera directa.

En este modelo económico y de inserción del país en el mundo, tanto el nivel educativo como el de investigación en ciencia y tecnología está por un lado limitado por el bajo valor agregado de los productos que el país produce y por otro lado restringido por la imposición por parte de los capitales multinacionales instalados en el país sobre qué tipo de calificación ha de tener la mano de obra que precisan para hacer funcionar sus negocios.

Un ejemplo de adaptación del sistema educativo a las necesidades del gran capital fue la creación de la Universidad Tecnológica (UTEC), la misma fue creada para ofrecer carreras acorde a las necesidades de las multinacionales que se han instalado en el país, y para asegurar que se cumplirá ese objetivo, su dirección depende directamente del poder ejecutivo, cercenando toda autonomía y posibilidad de libre creación que una institución universitaria debiera tener.

Un mayor desarrollo educativo, con su correlato en ciencia y tecnología, le permitiría al país desarrollar capacidades propias que pueden competir con los intereses de las multinacionales, por lo que la subordinación del país a los grandes capitales que promueve el gobierno se expresa en el modelo educativo, tanto de forma política al restringir y atacar la autonomía, como en limitar el presupuesto que el estado destina a la educación pública.

Una parte principal de la disputa por la educación está en lo relativo a la autonomía, la misma es fundamental para independizar las políticas educativas con respecto al poder político. Asimismo, es necesaria para garantizar que las políticas educativas no se realicen a corto plazo, ya que para poder evaluar y medir resultados de las mismas, son necesarios

períodos de tiempo más prolongados que los de un gobierno.

A su vez, la forma de plasmar la autonomía política, es el cogobierno, forma democrática de conducción de las instituciones educativas por sus propios actores.

En el actual contexto uruguayo, los institutos dedicados a la formación docente también se han querido modificar en el último periodo, pero aún está en discusión la forma de creación de la Universidad de Educación (UNED) y no se ha llegado a un final.

Cabe resaltar que es muy claro que la formación docente de nuestro país necesita una modificación radical. Pero consideramos que la consolidación de la UNED en base a las instituciones de formación docente existentes y en forma descoordinada con el resto del sistema, generan una enorme debilidad que no modifica el núcleo del problema.

La formación docente es uno de los pilares fundamentales de la enseñanza en nuestro país. La jerarquización de la actividad docente es ineludible en la construcción de este sistema, y debe ser acompañada por un reconocimiento social de la misma, que se traduzca en condiciones salariales que den la posibilidad de un ejercicio de la profesión digno y que permita una vida decorosa. En este marco creemos que es correcto el otorgamiento del carácter universitario a la formación de docentes de todos los niveles.

En Compromiso Socialista sostenemos que un pueblo que quiera tomar las riendas de su propio destino necesita de una educación de calidad y de libre acceso, lo que requiere disponer de los recursos presupuestales acordes, por lo que exigimos que se otorgue el 6% del PBI a la educación pública, cumpliendo con lo prometido durante las campañas electorales pasadas.